

Sentencia definitiva

RIT: O-593-2021

RUC: 21-4-0317763-3

_____ /

Santiago, siete de febrero de dos mil veintidós.

VISTO:

Demanda. Comparecieron don **JORGE LUIS FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA**, cédula de identidad N° 17.209.240-3, chileno, profesor de artes plásticas, domiciliado en Guayaquil, 524, departamento 42, Santiago; doña **RASSYM ANDREA JARAMILLO PEREIRA**, cédula de identidad N° 17.306.864-6, chilena, profesora de biología y ciencias naturales, domiciliada en Pasaje Volcán San Pedro 211, Villa San Enrique, Quilicura; doña **ESTEFANÍA BELÉN MUÑOZ LEPE**, cédula de identidad N° 18.422.606-5, chilena, profesora de matemáticas, domiciliada en Doña Leticia N° 245, Quilicura; don **RAUL ALEJANDRO REYES REYES**, cédula de identidad N° 16.270.844-9, chileno, licenciado en música, domiciliado en Catedral 2202, departamento 105, Santiago, y don **JORGE ADOLFO URRUTIA ORTEGA**, cédula de identidad N° 17.066.073-0, chileno, profesor de lengua y literatura, domiciliado en Merced 299, departamento 63, Santiago, quienes interpusieron demanda de cobro de prestaciones e indemnizaciones legales, en juicio de aplicación general, en contra de la **FUNDACIÓN EDUCACIONAL ATLÁNTICO**, rol único tributario N° 65.154.388-6 representada legalmente por don Pedro Romo Rojas, cédula de identidad N° 6.693.601-5, domiciliados en Miriam N° 165, Quilicura.

Solicitan que, en definitiva, se declare que sus despidos han sido improcedentes y la empresa sea obligada a pagar las siguientes indemnizaciones:

1) Indemnización adicional del artículo 87 de la Ley 19.070, la cual equivale a 4 días del mes de noviembre de 2020, diciembre 2020, enero 2021 y febrero 2021, e indemnización sustitutiva de aviso previo, de conformidad al inciso cuarto del artículo 162 del Código del Trabajo cuyos totales, por trabajador demandante, cuyos totales, se detallan en la siguiente tabla:

Demandante	Indemnización adicional	Indemnización sustitutiva aviso previo	Total demandando
Jorge Luis Fernández Sepúlveda	\$2.575.547	\$821.983	\$3.397.530
Rassym Andrea Jaramillo Pereira	\$1.980.828	\$632.179	\$2.613.007
Estefanía Belén Muñoz Lepe	\$2.614.140	\$834.300	\$3.448.440
Raúl Alejandro Reyes Reyes	\$2.515.506	\$802.821	\$3.318.327
Jorge Adolfo Urrutia Ortega	\$2.928.269	\$934.554	\$3.862.823
Total	\$12.614.290	\$4.025.837	\$16.640.127



- 2) Que, todos los beneficios se deben incrementar con las variaciones del I.P.C. y con los intereses que correspondan, según normas laborales vigentes.
- 3) Que se condene en costas a la demandada en caso de oposición.

Exponen que todos ellos prestaron servicios en funciones de docentes para la Fundación Educacional Atlántico, en el Colegio San Pedro Quilicura, ubicado en calle Miriam N° 165, de la comuna de Quilicura. Sus respectivas jornadas laborales ordinarias se expresan en la siguiente tabla, y las remuneraciones se componían de sueldo base, Bono de Reconocimiento Profesional (BRP) y bonificación correspondiente a las leyes 19.410 y 19.933:

Demandante	Función	Jornada de trabajo	Fecha inicio	Remuneración
Jorge Luis Fernández Sepúlveda	Profesor de Artes Visuales	39 horas	01.03.2020	\$821.983
Rassym Andrea Jaramillo Pereira	Profesora de Biología y Ciencias Naturales	30 horas	01.03.2020	\$632.179
Estefanía Belén Muñoz Lepe	Profesora de Matemáticas	40 horas	01.03.2020	\$834.300
Raúl Alejandro Reyes Reyes	Profesor de Música	43 horas	06.03.2020	\$802.821
Jorge Adolfo Urrutia Ortega	Profesor de Lengua y Literatura	44 horas	01.03.2020	\$934.554

Señalan que el 26 de noviembre de 2020, todos recibieron idénticas cartas de aviso de término de contrato de trabajo, las cuales invocaron la causal de despido del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo. Reproducen el tenor de esa comunicación e indican que en cada una de las cartas se realizó una oferta irrevocable de pago de indemnización sustituta de aviso previo junto a los 26 días del mes de noviembre del año 2020. No obstante lo anterior, a la fecha de presentación de la demanda únicamente han recibido el pago de la remuneración correspondiente a los 26 días trabajados del mes de noviembre de 2020, mas no la indemnización sustitutiva de aviso previo. En efecto, la empresa se negó al pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo toda vez que, al momento de acudir a Notaría a firmar los respectivos finiquitos de trabajo, la empresa se negó tajantemente al pago de los mismos para el caso de que los trabajadores suscribiesen los finiquitos con las respectivas reservas de derechos.

Destacan que al momento de su desvinculación, estaban contratados a plazo fijo, habiendo suscrito contrato los primeros días de marzo de 2020 (variable según trabajador), cuya vigencia se extendía hasta el 28 de febrero del año 2021.

Citan el artículo 87 de la Ley 19.070 y hacen presente que cada uno de los trabajadores demandantes son profesionales de la educación de conformidad a la regulación establecida en el artículo 2 de la Ley 19.070 y, por tanto, son directamente beneficiarios de la indemnización adicional regulada en el artículo 87 de la misma Ley.



Refieren que parte de los demandantes se encuentran en la hipótesis descrita en la primera parte del inciso primero del artículo citado, es decir, son poseedores de título de profesor, y la otra parte de los demandantes se encuentran en la hipótesis descrita en la segunda parte del mismo inciso, es decir, prestan funciones en el establecimiento encontrándose legalmente habilitados para ejercer la función docente. En la tabla siguiente, se señala la situación de cada trabajador demandante:

Demandante	
Jorge Luis Fernández Sepúlveda	Título de Profesor de Artes Plásticas
Rassym Andrea Jaramillo Pereira	Título de Profesora de Biología y Ciencias Naturales
Estefanía Belén Muñoz Lepe	Ingeniera Comercial, habilitada para ejercer la función docente
Raúl Alejandro Reyes Reyes	Licenciado en Música, habilitado para ejercer función docente
Jorge Adolfo Urrutia Ortega	Licenciado en Letras Hispánicas, habilitado para ejercer función docente

Indican que tres de los cinco trabajadores demandantes no cuentan con título de profesor, motivo por el cual, para ser parte del equipo docente fue necesario realizar la habilitación legal correspondiente en su oportunidad. Al respecto, señalan que la regulación de dicho proceso de habilitación se encuentra en la Ley 20.370, específicamente en artículo 46 letra g) y el Decreto 352, Título II. En base a ambas reglamentaciones, fue la demandada, en su calidad de sostenedora del establecimiento educacional, la que realizó la tramitación de la autorización para el ejercicio docente de los tres profesionales por parte de la Secretaria Regional Ministerial de Educación. Con todo, alegan que los cinco trabajadores demandantes son beneficiarios del derecho que se establece en el artículo 87 de la Ley 19.070, relativo a una indemnización adicional equivalente al total de remuneraciones que habrían tenido derecho a percibir si el contrato hubiese durando hasta el término del año laboral en curso. No obstante lo anterior, la empresa consideró únicamente el pago de una indemnización sustituta de aviso previo y los 26 días trabajados durante el mes de noviembre de 2020, omitiéndose la correspondiente indemnización adicional.

Contestación de la demanda. Compareció don Pedro Romo Rojas, profesor, en representación de Fundación Educacional Atlántico, solicitando el rechazo de la demanda, con costas. Expone lo siguiente:

1. Es efectivo que la relación laboral de todos los demandantes se inició con fecha 1 de marzo del año 2020 y se extendió hasta el 26 de diciembre de 2020 y que prestaban servicios para el Colegio San Pedro de Quilicura, en calidad de docentes solo respecto de don Jorge Fernández y Rassym Jaramillo, con la jornada señalada y contratos de trabajo a plazo fijo hasta el 28 de febrero de 2021.



Es efectivo que doña Estefanía Belén Muñoz Lepe, don Raúl Alejandro Reyes Reyes y don Jorge Adolfo Urrutia Ortega no tienen título de profesor.

2. No es efectivo que las cartas de despido sean idénticas, lo que sí es igual es la fecha de término, la causal invocada y los hechos en que se funda.

3. Se adeuda la indemnización sustitutiva a Jorge Luis Fernández Sepúlveda, doña Estefanía Belén Muñoz Lepe, don Raúl Alejandro Reyes Reyes y don Jorge Adolfo Urrutia Ortega, no así a doña Rassym Jaramillo, quien firmó el finiquito y se le pagó \$571.650 el 12 de enero de 2021 por ese concepto.

4. Es efectiva la remuneración señalada en la demanda.

5. Es efectivo que con fecha 26 de octubre de 2020 se les comunicó a los actores el término de la relación laboral por la causal contemplada en el artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo, fundado en que la Fundación Educacional Atlántico es sostenedora de los Colegios, esto es, San Pedro de Quilicura y Polivalente San Pedro, los cuales se ubican físicamente uno al lado del otro, dado el impacto de la pandemia y consecuente crisis económica, ha llevado a la Fundación a tomar la decisión de reestructurar la planta docente, disminuyéndola al mínimo posible, con la finalidad de optimizar los recursos, racionalizando y disminuyendo costos. Debida a esta racionalización, se ha decidido prescindir de sus servicios y en su caso, se entregarán las clases a un docente con menor remuneración. Sin embargo, refiere que en la demanda de autos, en el petitorio no se demanda ni se solicita la declaración de despido injustificado, y tampoco en el cuerpo de la demanda se indica que la causal de despido es injustificada o improcedente, la demanda solo versa acerca de un cobro de remuneraciones e indemnización adicional del artículo 87 de la Ley N° 19.070.

Sostiene que no es efectivo que se haya incurrido en la obligación de pagar la indemnización del artículo 87 del estatuto docente, por el solo hecho de haber invocado la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, ya que en primer lugar no se ha demandado en autos la declaración de injustificado del despido.

En segundo lugar, menciona que solo los demandantes Jorge Fernández y Rassym Jaramillo son profesores y podría ser aplicable el artículo 87 inciso segundo del Estatuto Docente. En efecto, del tenor del artículo 87 inciso segundo, es claro en cuanto a que la indemnización a que se refiere, está establecida en beneficio de quienes detentan la calidad de profesores, sin perjuicio de que el Estatuto Docente sea aplicable en general a otros profesionales de la educación. Al respecto, múltiples son las funciones que requiere la complejidad del proceso educativo, como distingue el artículo 5° de dicho estatuto, definiendo los que le siguen, qué debe entenderse por función docente, función docente-directiva y funciones técnico-pedagógicas. Todas ellas son desarrolladas por “profesionales de la educación” en los términos del artículo 1° de la ley 19.070, marco normativo que las regula. Sin embargo, la circunstancia de encontrarse la actividad regulada por la ley 19.070 no conlleva necesariamente a que todas sus normas resulten aplicables a todos los profesionales de la educación. En tal sentido, cobra



importancia la redacción del artículo 87 inciso segundo que utiliza la voz “profesor” en lugar de “profesional de la educación”, ocupada en múltiples otras disposiciones de dicha ley. Tal especificación debe entenderse entonces como una necesaria limitación respecto de quiénes son titulares del beneficio que esa norma contiene, restringiéndola a quienes se desempeñen propiamente como profesores, esto es, que ejerzan la función docente y estén en posesión del título que los habilita para ello en conformidad al artículo 2° del referido estatuto. Así se falló por la Corte de Apelaciones de San Miguel en causa rol 419-2020 con fecha 19 de febrero de 2021.

En suma, afirma que la indemnización demandada no procede respecto de doña Estefanía Belén Muñoz Lepe, don Raúl Alejandro Reyes Reyes y don Jorge Adolfo Urrutia Ortega, ya que tal como lo reconocen en la demanda, ellos no tienen el título de profesor.

Excepción de finiquito. Opone respecto de las prestaciones demandadas por doña Rassym Andrea Jaramillo Pereira, la excepción de finiquito que se derive respecto de la relación laboral existente entre el 1 de marzo y el 26 de noviembre de 2020, ya que la actora firmó finiquito el 11 de diciembre de 2020, ante el Notario de Santiago don Pablo González Caamaño. La reserva de derechos efectuada dice *“Me reservo el derecho para demandar despido improcedente, recargo legal, indemnizaciones por término de contrato, vulneración de término de contrato, vulneración de derechos fundamentales, cobro de bono de vacaciones, aguinaldo de navidad y remuneraciones adeudadas”*. Sin embargo, en la demanda de autos, no se cobra ninguna de las prestaciones respecto de las cuales hizo expresa reserva de derechos, por lo que debe operar el efecto extintor de derechos y obligaciones que contiene el finiquito.

Respecto de las prestaciones demandadas, señala lo siguiente:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo: procede su cobro y pago solo respecto de Jorge Luis Fernández Sepúlveda, doña Estefanía Belén Muñoz Lepe, don Raúl Alejandro Reyes Reyes y don Jorge Adolfo Urrutia Ortega.

b) Indemnización establecida en el artículo 87 del estatuto docente: no procede su cobro y pago para ninguno de los demandantes, ya que sólo dos de los demandantes son profesores y el resto no posee el título. Además, la indemnización demandada se basa en el inciso segundo del artículo 87, y como el aviso se dio con fecha 26 de noviembre de 2020, el aviso se encuentra otorgado con más de 60 días de anticipación al inicio del año escolar siguiente, por lo que no tendría aplicación el cobro de la indemnización demandada.

c) No procede condena en costas, ya que la demanda es absolutamente infundada y carente de todo motivo plausible.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Audiencia preparatoria. Excepción de finiquito. Llamado a conciliación. Sentencia parcial. Hechos no controvertidos. Hechos

controvertidos. Que en la audiencia preparatoria de 16 de junio de 2021 se verificaron los siguientes trámites procesales:

En cuanto a la excepción de finiquito opuesta respecto de la demandante Rassym Andrea Jaramillo Pereira, su parte evacúa el traslado conferido y el Tribunal deja su resolución para definitiva. La demandante expone que el argumento central que indica la contraria es que la trabajadora habría realizado una reserva derechos en su finiquito mas esta reserva no contemplaría las acciones que se están demandando. Solicita el rechazo de la excepción principalmente porque como se podrá observar en el finiquito de la trabajadora, cuya reserva derechos es correctamente transcrita por la contraria en su contestación, la trabajadora realizó expresa reserva respecto de las indemnizaciones por término de contrato, siendo justamente las indemnizaciones que se demandan en esta demanda de aquella naturaleza, es decir, que su origen radica específicamente en el término al contrato de trabajo: la indemnización del artículo 87 del Estatuto Docente y la indemnización sustitutiva de aviso previo. Indica que la reserva de derechos realizada por la trabajadora no utiliza los términos exactos de las acciones que están ejercidas. Al respecto hace presente que la jurisprudencia se ha pronunciado en torno al hecho de que no es posible exigirle al trabajador que maneje los conceptos legales, así por ejemplo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol 209-2019. Alega que en estos autos la voluntad de la trabajadora de reservarse los derechos para demandar las indemnizaciones a las que da origen el término al contrato es clara, expresa y suficiente por lo que solicita el rechazo de la excepción deducida.

Llamado a conciliación: resultó frustrado.

Sentencia parcial: se acoge la demanda parcialmente y se ordena pagar a la demandada la indemnización sustitutiva de aviso previo según la base de cálculo propuesta por la demandante, respecto de Jorge Luis Fernández Sepúlveda; Estefanía Belén Muñoz Lepe; Raúl Alejandro Reyes Reyes y Jorge Adolfo Urrutia Ortega.

Hechos no controvertidos:

1. Fecha de inicio de la relación laboral a plazo fijo hasta el 28 de febrero del año 2021; que se puso término a la relación laboral con fecha 26 de noviembre de 2020 por la causal de necesidad de la empresa y que la comunicación fue recibida por los actores el 26 de noviembre de 2020.

2. Remuneración pactada para efectos indemnizatorios.

3. Que los demandantes Fernández y Jaramillo cumplían funciones como docentes en la jornada señalada en la demanda.

Hechos controvertidos:

1. Efectividad que los actores son profesionales de la educación, pormenores y circunstancias de aquello.

2. Prestaciones adeudadas a los demandantes con ocasión del término de servicios.



3. Efectividad de haberse suscrito entre la demandada y Jaramillo Pereira un finiquito, cumpliendo con las formalidades legales y en el evento de haberse efectuado una reserva, términos en los cuales se estipuló la misma.

SEGUNDO: Medios de prueba de la demandada. Que la demandada incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental

1. Carta despido de los demandantes.
2. Finiquito de doña Rassym Jaramillo 2020.
3. Pago BCI Rassym Jaramillo.
4. Autorización para ejercer docencia de Estefanía Muñoz Lepe, Raúl Reyes Reyes y Jorge Urrutia Ortega.
5. Finiquitos de Jorge Fernández Sepúlveda, Estefanía Belén Muñoz Lepe, Raúl Reyes Reyes y Jorge Urrutia Ortega.

TERCERO: Medios de prueba de la demandante. Que para acreditar sus pretensiones, la demandante incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental

Respecto de Estefanía Belén Muñoz Lepe:

1. Carta de aviso de término de contrato de trabajo, de fecha 26 de noviembre de 2020, emitida por Fundación Educacional Atlántico.
2. Liquidación de remuneraciones mayo 2019 y junio 2019, emitidas por Fundación Educacional Atlántico.

Respecto de Jorge Luis Fernández Sepúlveda:

3. Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 26 de noviembre de 2020, emitida por Fundación Educacional Atlántico.

Respecto de Jorge Adolfo Urrutia Ortega:

4. Contrato de trabajo suscrito entre Fundación Educacional Atlántico y Jorge Urrutia Ortega, de fecha 1 de marzo de 2019.
5. Anexo de contrato de trabajo suscrito entre Fundación Educacional Atlántico y Jorge Urrutia Ortega, de fecha 15 de abril de 2019.
6. Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 26 de noviembre de 2020, emitida por Fundación Educacional Atlántico.
7. Liquidación de remuneraciones de los meses mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020.

Respecto de Rassym Andrea Jaramillo Pereira:

8. Comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo emitida por Fundación Educacional Atlántico, otorgada por Dirección del Trabajo con fecha 26 de noviembre de 2020.
9. Liquidación de remuneraciones de los meses agosto, septiembre y octubre de 2020.

Respecto de Raúl Alejandro Reyes Reyes:

10. Contrato de trabajo suscrito entre Fundación Educacional Atlántico y Raúl Alejandro Reyes Reyes, con fecha 6 de marzo de 2020.



11. Carta de aviso de término de contrato de trabajo dirigida a Raúl Alejandro Reyes Reyes, con fecha 26 de noviembre de 2020, emitida por Fundación Educacional Atlántico.

12. Liquidación de remuneraciones de los meses mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020.

El Tribunal tiene por incorporada la prueba documental de la parte demandante. Quedó constancia que la parte demandante se desiste de incorporar los documentos N° 2 y N° 5 que fueron ofrecidos en audiencia preparatoria.

Testimonial

Prestó declaración, previo juramento de decir verdad, doña Ingeborg Arelis Flores Becerra, cédula de identidad N° 19.283.732-4.

Exhibición de documentos

La demandada exhibe a la demandante: *1. Contratos de trabajo y anexo de contratos de trabajo suscrito entre Fundación Educacional Atlántico y cada uno de los trabajadores demandantes, periodo marzo a noviembre 2020; 2. Liquidaciones de remuneraciones emitidas por Fundación Educacional Atlántico, respecto de cada uno de los trabajadores demandantes, periodo marzo a noviembre 2020.* La demandante tiene por cumplida la diligencia e incorpora los documentos.

CUARTO: Hechos acreditados. Que atendido el mérito de la discusión señalada en los escritos de demanda y de contestación, y de acuerdo a la prueba incorporada quedan acreditados los siguientes antecedentes de los vínculos laborales entre los demandantes y la Fundación Educacional Atlántico:

a) Don Jorge Luis Fernández Sepúlveda es Profesor de Artes Plásticas, ingresó a prestar servicios el 1 de marzo de 2020 con una jornada de trabajo de 39 horas y una remuneración de \$821.983. Se obligó a cumplir la función de docente de Artes en educación básica y media.

b) Doña Rassym Andrea Jaramillo Pereira es Profesora de Biología y Ciencias Naturales, ingresó a prestar servicios el 1 de marzo de 2020 con una jornada de trabajo de 30 horas y una remuneración de \$632.179. Se obligó a cumplir la función de docente de Ciencias.

c) Doña Estefanía Belén Muñoz Lepe es Ingeniera Comercial, habilitada para ejercer la función docente, ingresó a prestar servicios el 1 de marzo de 2020 con una jornada de trabajo de 40 horas y una remuneración de \$834.300. Se obligó a cumplir la función de docente de Matemáticas en educación media.

d) Don Raúl Alejandro Reyes Reyes es Licenciado en Música, habilitado para ejercer función docente, ingresó a prestar servicios el 6 de marzo de 2020 con una jornada de trabajo de 43 horas y una remuneración de \$802.821. Se obligó a cumplir la función de docente de Musica en educación básica y media.

e) Jorge Adolfo Urrutia Ortega es Licenciado en Letras Hispánicas, habilitado para ejercer función docente, ingresó a prestar servicios el 1 de marzo de 2020 con una jornada de trabajo de 44 horas y una remuneración de \$934.554. Se obligó a cumplir la función de docente de Lenguaje en educación media.



f) Los contratos de trabajo de todos los demandantes se pactaron a plazo fijo, con duración hasta el 28 de febrero de 2021.

g) Todos los demandantes fueron despedidos el 26 de noviembre de 2020, invocándose por la causal de necesidad de la empresa y la comunicación fue recibida por ellos, dejando de cumplir sus funciones ese mismo día. Así se expresa en cada una de las cartas de despido.

QUINTO: Excepción de finiquito. Que la demandada opuso esta excepción respecto de las prestaciones demandadas por doña Rassym Andrea Jaramillo Pereira alegando que, pese a la reserva de acciones, en la demanda de autos no se cobra ninguna de las prestaciones por las cuales hizo la reserva de derechos, por lo que debe operar el efecto extintor que contiene el finiquito.

El finiquito fue suscrito ante notario público y autorizado el 11 de diciembre de 2020, constando en su cláusula cuarta que la demandante declaró “...*que durante todo el tiempo que prestó servicios para el Empleador, recibió de éste, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo a su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones familiares autorizadas por la respectiva Institución de Previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, feriados legales, indemnización por accidentes del trabajo, bonificaciones legales y contractuales, gratificaciones y participaciones, en conformidad a la Ley, que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo alguno que formular en contra del Empleador le otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno de sus derechos. El Trabajador, a mayor abundamiento, renuncia a cualquier acción, derecho o pretensión que pudiere hacer valer eventualmente en contra de los representantes, directores o funcionarios del Empleador y que se funde en el contrato, en su terminación o en cualquier otro hecho anterior a ésta fecha*”. Sin embargo, anotó la siguiente reserva de acciones en manuscrito: “*Me reservo el derecho para demandar despido improcedente, recargo legal, indemnizaciones por término de contrato, vulneración de término de contrato, vulneración de derechos fundamentales, cobro de bono de vacaciones, aguinaldo de navidad y remuneraciones adeudadas*”.

La excepción opuesta será rechazada por cuanto la demandante ejerció acción de cobro de prestaciones e indemnizaciones legales respecto de la indemnización adicional del artículo 87 de la Ley 19.070 e indemnización sustitutiva de aviso previo, lo cual guarda plena relación con el tenor de la reserva anotada en aquella parte que refiere “*indemnizaciones por término de contrato*”, por lo que el finiquito suscrito en esas condiciones no tiene poder liberatorio respecto tales acciones, sin perjuicio que la indemnización sustitutiva señalada en aquel instrumento por la suma de \$571.650, fue pagada mediante transferencia



electrónica el día 13 de enero de 2021 según consta en el respectivo comprobante del banco BCI, incorporado por la demandada y no objetado, por lo que subsiste un saldo de \$60.259, considerando que el monto de la remuneración por \$632.179 no fue controvertido por la demandada.

SEXTO: Indemnización sustitutiva de aviso previo. Que en relación a esta indemnización se emitió pronunciamiento en la audiencia preparatoria, mediante sentencia parcial, respecto de Jorge Luis Fernández Sepúlveda; Estefanía Belén Muñoz Lepe; Raúl Alejandro Reyes Reyes y Jorge Adolfo Urrutia Ortega, por lo que en este acto solo se emitirá resolución por doña Rassym Andrea Jaramillo Pereira y por el monto expresado en el considerando anterior, acogiendo la demanda en esa parte.

SEPTIMO: Indemnización adicional del artículo 87 de la Ley N° 19.070. Que la demandada contravirtió la procedencia de esta indemnización, señalando que solo los demandantes Jorge Fernández y Rassym Jaramillo son profesores y podría ser aplicable el artículo 87 inciso segundo del Estatuto Docente. En cambio, en el caso de los demás demandantes alega la improcedencia al tenor del artículo 87 inciso segundo, afirmando que este es claro en cuanto a que la indemnización a que se refiere, es en beneficio de quienes detentan la calidad de profesores, sin perjuicio de que el Estatuto Docente sea aplicable en general a otros profesionales de la educación. Por tal motivo, estima que la indemnización demandada no procede respecto de doña Estefanía Belén Muñoz Lepe, don Raúl Alejandro Reyes Reyes y don Jorge Adolfo Urrutia Ortega, ya que tal como lo reconocen en la demanda, ellos no tienen el título de profesor.

En la propia demanda se reconoce que estos actores prestaron funciones, encontrándose legalmente habilitados para ejercer la función docente, sin perjuicio de no tener el título profesional de profesores, lo que se corrobora con las respectivas *autorizaciones para el ejercicio de la función docente*, emanadas del Ministerio de Educación, no objetadas por la demandante.

Para efectos de determinar la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 87 de la Ley N° 19.070, se debe tener presente que este cuerpo legal declara aplicable sus disposiciones, entre otros, a los *profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos de educación básica y media, de administración municipal o particular* (artículo 1°), definiendo como profesionales de educación a las *personas que posean título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales y Universidades. Asimismo se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes* (artículo 2°). Es decir, de un modo general quedan sujetas a las normas de la Ley N° 19.070 tanto aquellos que posean el *título de profesor o educador*, y de la misma manera quienes estén *legalmente habilitadas* para ejercer la función docente, aun no contando con el título de profesor o educador. Sin embargo, el artículo 87 inciso restringe su ámbito de aplicación solo a los profesores, sin hacer



mención genérica a los *profesionales de la educación*, por cuanto expresa “*Si el empleador pusiere término al contrato de trabajo de un **profesor** por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, deberá pagarle además de la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 163 de ese mismo código, otra adicional equivalente al total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho contrato hubiese durado hasta el término del año laboral en curso*”. El tenor literal de la disposición es claro, solo es acreedor de la indemnización adicional el profesor, esto es, aquella persona que detente el título profesional de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales y Universidades en los términos del citado artículo 2°, de modo que siendo claro el tenor literal no procede aplicar la norma por analogía o mediante una interpretación extensiva a hipótesis y personas no previstos en ella.

Es un hecho de la causa que de los demandantes solo tienen el título de profesor don Jorge Luis Fernández Sepúlveda y doña Rassym Andrea Jaramillo Pereira, y que fueron despedidos invocándose la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, ocurriendo el término de sus servicios el mismo día de su despido, 26 de noviembre de 2020, en circunstancias que a esa fecha todavía estaba pendiente el plazo de duración de sus respectivos contratos de trabajo, fijado hasta el 28 de febrero de 2021. De acuerdo al referido 87, no tienen derecho a la indemnización por años de servicios atendida la vigencia de sus contratos, por lo que no corresponde declarar la improcedencia del despido, lo cual se justifica solamente para efectos de ordenar el pago del aumento legal del 30% respecto de la indemnización por años de servicio, teniendo presente además que esta indemnización no fue demandada. No obstante lo anterior, los actores sí tienen derecho a la indemnización adicional equivalente al total de las remuneraciones que habrían debido percibir entre el 27 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, considerando para tales efectos la remuneración de don Jorge Luis Fernández Sepúlveda por \$821.983 y de doña Rassym Andrea Jaramillo Pereira por \$632.179, acogiéndose la demanda respectivamente.

En el caso de los demandantes doña Estefanía Belén Muñoz Lepe, don Raúl Alejandro Reyes Reyes y don Jorge Adolfo Urrutia Ortega, al no tener el título de profesor, no son acreedores de la mencionada indemnización adicional, por lo que su demanda será rechazada.

OCTAVO: Valoración de la prueba. Que la prueba se apreció de conformidad a las reglas de la sana crítica y se desestimarán como elementos de convicción los restantes medios de prueba individualizados en los considerandos segundo y tercero anteriores, pero no mencionados expresamente a partir del considerando cuarto, toda vez que su alcance probatorio resulta sobreabundante en relación a los hechos, decisiones y conclusiones determinados en el proceso.

NOVENO: Costas. Que cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 a 11, 161, 162, 163, 164, 168, 420, 423, 425 a 431, 432 a 438, 446 a 462 del Código del Trabajo, 1°, 2° y 87 de la Ley N° 19.070; se resuelve:

I) Que se rechaza la excepción de finiquito opuesta por la demandada, respecto de las acciones ejercidas por doña Rassym Andrea Jaramillo Pereira.

II) Que se acoge la demanda interpuesta por don **JORGE LUIS FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA**, cédula de identidad N° 17.209.240-3, y por doña **RASSYM ANDREA JARAMILLO PEREIRA**, cédula de identidad N° 17.306.864-6, en contra de la **FUNDACIÓN EDUCACIONAL ATLÁNTICO**, rol único tributario N° 65.154.388-6 representada legalmente por don Pedro Romo Rojas, cédula de identidad N° 6.693.601-5; y se declara que la demandada deberá pagar las siguientes sumas a los actores:

a) Don Jorge Luis Fernández Sepúlveda:

- \$2.575.547, por concepto de indemnización adicional del artículo 87 de la Ley N° 19.070, por el periodo entre el 27 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021.

b) Doña Rassym Andrea Jaramillo Pereira:

- \$60.529, por diferencia adeudada por indemnización sustitutiva.

- \$1.980.827, por concepto de indemnización adicional del artículo 87 de la Ley N° 19.070, por el periodo entre el 27 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021.

III) Que se rechaza la demanda interpuesta por doña **ESTEFANÍA BELÉN MUÑOZ LEPE**, cédula de identidad N° 18.422.606-5, don **RAUL ALEJANDRO REYES REYES**, cédula de identidad N° 16.270.844-9, y don **JORGE ADOLFO URRUTIA ORTEGA**, cédula de identidad N° 17.066.073-0, en contra de la **FUNDACIÓN EDUCACIONAL ATLÁNTICO**, rol único tributario N° 65.154.388-6 representada legalmente por don Pedro Romo Rojas, cédula de identidad N° 6.693.601-5.

IV) Que lo resuelto precedentemente es sin perjuicio de la sentencia parcial dictada en la audiencia preparatoria.

V) Que las sumas que se ordena pagar se reajustarán y devengarán el interés que corresponda, según el artículo 173 del Código del Trabajo.

VI) Que cada parte pagará sus costas.

VII) Ejecutoriada que se encuentre esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de 5° día hábil, de lo contrario y previa certificación pasen los antecedentes para su cumplimiento compulsivo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RUC: 21-4-0317763-3

RIT: O-593-2021

Pronunciada por don Jorge Luis Escudero Navarro, Juez suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



En Santiago, a siete de febrero de dos mil veintidós, se notificó por el Estado Diario la resolución precedente.

